

"Acceso seguro al servicio de agua potable, una necesidad urgente"

En el seno del consejo consultivo de la Iniciativa Agua & Medioambiente, llevamos a cabo un diálogo acerca de "**Agua, COVID-19, Sequía: Situación y desafíos**". Dentro de los diversos temas analizados, hemos considerado necesario destacar los esfuerzos de articulación y construcción de acuerdos¹.

El rol insustituible del agua potable y su acceso seguro para disminuir el riesgo de contraer COVID-19, ha vuelto las miradas de todos y todas a una suerte de revalorización del acceso al agua potable para el consumo de las personas y la necesidad de garantizar un abastecimiento seguro, continuo y en cantidades suficientes, al menos de 50 l/persona/día de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, hay brechas en su acceso tanto desde el punto de vista de la cantidad como también de la calidad, que existen con anterioridad a la pandemia del presente año.

En efecto, esas brechas de acceso exigen ser abordadas con urgencia, más aún ante los impactos del cambio climático que se han acrecentado y determinan un escenario de alta complejidad reflejado, por ejemplo, en los eventos extremos por aumento de temperaturas, cambios en los patrones de lluvias, y que se espera se reiteren a futuro. Lo anterior, en el contexto de la mayor sequía registrada, tanto por su intensidad y su extensión territorial, como por su duración (más de 10 años), cual representa un desafío que demanda, día a día, esfuerzos de todos los involucrados.

En las zonas urbanas concesionadas, donde la cobertura es prácticamente total, asegurar la continuidad operacional del abastecimiento de agua potable se da por hecho, pese a que es resultante del compromiso de los trabajadores de las empresas sanitarias y de la aplicación de estrictos protocolos y medidas de gestión operacional, para protegerlos y evitar la discontinuidad del servicio de agua potable. A su vez, y dado el escenario de crisis hídrica descrito, es necesario incrementar la robustez y resiliencia tanto de la operación como de la infraestructura, y disminuir el agua no facturada de la red de agua potable, en orden a contribuir a la disminución de la vulnerabilidad del sistema.

Además de lo operacional, para que las familias vulnerables no se vean marginadas del acceso al servicio de agua potable continuo y seguro, por las consecuencias económicas de la emergencia de salud sobre el empleo e ingresos, las empresas sanitarias implementaron un plan de beneficios dirigido al 60% de los hogares más vulnerables, desempleados y tercera edad, que permite suspender temporalmente el pago de sus cuentas sin multas ni interés. Adicionalmente, desde marzo, las empresas sanitarias dejaron de efectuar cortes por no pago, asegurando a todos los hogares urbanos en su área de concesión, el acceso a agua potable.

¹ La Secretaría Técnica deja constancia del agradecimiento por su generosa contribución a Gabriel Mancilla, Javier Vargas, Gabriel Zamorano y Rodrigo Riveros. Con todo, la responsabilidad de la versión y edición final, así como de sus omisiones y errores, recae en los integrantes de la Secretaría Técnica: Francisco Donoso y Rodrigo Fuster

No obstante, estos esfuerzos, en el ámbito urbano coexisten diversas situaciones de coberturas insuficientes y precarias, como por ejemplo en áreas atendidas por sistemas de Agua Potable Rural (APR), o servicios municipales. Además de lo anterior, persisten condiciones de extrema precariedad en el acceso al agua y de elevado riesgo sanitario: los campamentos. Se agregan a esta situación los asentamientos informales que en el contexto actual han aumentado dada la precariedad económica de los sectores más vulnerables de la población. Para esas situaciones, han sido los gobiernos regionales y locales los llamados a liderar e impulsar soluciones, y a aunar voluntades, destinadas a mitigar esas situaciones de extremo riesgo sanitario.

En el ámbito rural por su parte, muchas zonas no cuentan en la actualidad con un acceso seguro al agua o lo tienen en cantidades inferiores a los estándares mínimos, estimándose que esta situación afectaría entre 200.000 y 350.000 personas². En los sistemas de APR que disponen de fuentes para el normal abastecimiento de sus asociados, la situación es preocupante pues los efectos económicos de la pandemia son más pronunciados en el campo que en las ciudades, pues la proporción de la población vulnerable es mayor en las zonas rurales. Dada la fragilidad financiera de la gran mayoría de esos sistemas, se requerirá de un programa de subsidio público para mantener su continuidad operativa, para que el acceso al agua potable de la población no resulte afectado.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha oficializado un apoyo económico (“bono COVID”³), que permite paliar las consecuencias actuales y de corto plazo de la pandemia. Sin embargo, quedan pendientes aquellas soluciones que aborden el problema de fondo, en cuanto a un suministro seguro de agua potable en cantidad y calidad en las zonas rurales de nuestro país.

Todas las acciones destinadas a que las familias puedan contar con un abastecimiento seguro y continuo de agua potable suponen que existe disponibilidad de agua en las fuentes, que, en el actual contexto, dista mucho de ser trivial, requiriéndose una actividad mucho más efectiva de gestión (convenios, acuerdos, trasvases, etc.).

La emergencia actual ha puesto en evidencia, por lo tanto, las brechas de gestión de los recursos hídricos en términos de lograr avanzar en decisiones oportunas respecto a la infraestructura y decisiones de asignación del recurso necesarias para distribuir y aumentar o recuperar la seguridad de suministro de agua, brechas que deben estar reflejadas en la política pública. La interrogante es entonces cómo se instalan prácticas en los territorios que permitan planificar desde lo local de manera preventiva, para no solo actuar reactivamente, es decir, que las obras y medidas estén planificadas y ejecutadas antes de una necesidad. En esa línea, es relevante explorar nuevas metodologías para evaluar económica y socialmente los proyectos hídricos,

² Ver, por ejemplo, Presentación MOP Comisión de Recursos Hídricos, Cámara de Diputados. 22 de abril 2020; y también Covid-19: Greenpeace advierte que 350 mil personas no cuentan con agua en Chile. <https://www.diarioconcepcion.cl/pais/2020/03/31/covid-19-greenpeace-advierte-que-350-mil-personas-no-cuentan-con-agua-en-chile.html>

³ El “Plan Nacional de Ayuda para los Sistemas de Agua Potable Rural” (bono COVID) consiste en la entrega de un subsidio a los sistemas de APR que lo soliciten para compensar la disminución de ingresos por efecto de las dificultades de pago de sus asociados, con el fin de ayudarlos a mantener la continuidad operacional de sus servicios. En promedio, la ayuda -dependiendo del tamaño del sistema de APR- oscila entre 300 y 560 mil pesos mensuales. Ver, por ejemplo: http://www.doh.gov.cl/APR/Paginas/Detalle_noticia_APR.aspx?item=750

valorizando la infraestructura destinada a recuperar la “seguridad” perdida tanto por efecto del cambio climático como por efecto de la megasequía.

Los esfuerzos para garantizar el consumo humano y, simultáneamente, enfrentar la sequía, han derivado en algunos casos en el fortalecimiento o la incorporación de prácticas de trabajo mancomunado entre distintos actores de la cuenca. En algunas situaciones propiciados por el Estado, a veces impulsados desde actores privados en los territorios en los que se emplazan, o bien originados desde los espacios de gestión que brindan las organizaciones de usuarios.

Valoramos este esfuerzo de articulación y generosidad entre usuarios de agua y actores públicos, pues es fruto de la construcción de confianza mutua, para privilegiar el consumo humano y para identificar un plan de inversión de mediano plazo que contribuya a la seguridad hídrica.

Pese a la gran importancia de las prácticas de gestión y de generación de acuerdos que destacamos, estas prácticas no son aún generalizadas, por lo que requieren ser fortalecidas las instancias de participación y dialogo entre los actores en la búsqueda de acuerdos, considerando que el escenario futuro será más desafiante que en el pasado. Se necesita entonces una gobernanza que contribuya a dar certezas de acceso al agua para consumo humano, por lo que estas prácticas, acuerdos y mecanismos de gestión y dialogo deberían consolidarse o institucionalizarse.

Así como el desarrollo de infraestructura, combinado con la utilización de soluciones basadas en la naturaleza y gestión, son elementos preponderantes para reducir la incertidumbre de la disponibilidad de agua, es clave una gobernanza que⁴, contribuya a la sustentabilidad de la cuenca, y de esta manera contribuir al compromiso de *“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”* en el marco de los ODS.

Julio 2020

⁴ “La oferta puede mejorar combinando inversiones, uso de fuentes no convencionales, mayor eficiencia e “infraestructura verde”. Punto N°11. EL AGUA: ¿CUÁNTO MÁS ESPERAR? Manifiesto de los Acuerdos de la Mesa de Agua y Medio Ambiente – 2015. http://www.aguaymedioambiente.cl/wp-content/uploads/2018/11/el-agua-cunto-ms-esperar_-manifiesto-agua-y-medioambiente-_2015.pdf